



Multiculturalismo: consideraciones teóricas sobre la dimensión de lo cívico y la dimensión de lo étnico

Ignacio Díaz de la Serna*

I

El funcionamiento relativamente armonioso de la sociedad estadounidense descansa sobre un antiguo principio, el cual fue inventado y legitimado en la segunda mitad del siglo XVII: el principio de la tolerancia. Desde la época de los primeros colonos, la tolerancia religiosa tuvo efectos políticos debido a que aseguraba la tranquilidad pública y la armonía general. Los fundadores de la República no suprimieron las iglesias; sólo limitaron su influencia prohibiendo que una religión de Estado lograra establecerse. Así, las religiones eran consideradas como facciones políticas. Al promover su multiplicación se evitaba que alguna de ellas llegara a dominar a las otras, sacrificando entonces el bien público por el dominio de las pasiones particulares.

La extensión progresiva del principio y práctica de la tolerancia en el conjunto de las comunidades étnicas y culturales de las trece colonias hizo posible que emergiera una nación nueva sin equivalente en el mundo: una nación de inmigrantes, un *melting-pot* una "singularidad plural".

* Centro de Investigaciones sobre América del Norte-UNAM.

Gracias a la tolerancia reinante el ciudadano podía escapar, si así lo deseaba, de la religión y de la cultura de sus antepasados. Todo era, en última instancia, un asunto de elección personal. No obstante, contrario a lo que pudiera pensarse, esa libertad excepcional no propiciaba la anarquía. De hecho, se apoyaba en la creación de una nueva religión de Estado: el patriotismo constitucional elaborado pacientemente por las élites políticas y consolidado por esa suerte de “tutores” de la república que han sido los jueces de la Suprema Corte, por los maestros en las escuelas públicas y por los organizadores de las grandes fiestas y conmemoraciones republicanas.

El principio de tolerancia, tal como hoy existe, no es una mera proclama vacía de sentido. Se trata de un valor esencial que prima por encima de las nociones particulares del bien común y de la verdad, comenzando con las verdades religiosas y morales. Mayor ha sido su fuerza cuanto más ha sido legitimado en Estados Unidos por una tradición constitucional que defiende la imparcialidad del Estado, la igualdad de todos ante la ley, la igualdad de oportunidades y la abolición de la discriminación racial. Por consiguiente, el principio de tolerancia ha sido inseparable de las grandes conquistas del liberalismo político estadounidense.¹

Es evidente que esas conquistas no han arrojado siempre resultados concretos en la vida política de ese país, debido muchas veces a grupos que predicán la intolerancia como los nativistas del siglo XIX, los defensores del macartismo, los partidarios del darwinismo social, etcétera.

Actualmente en Estados Unidos, uno de los conflictos centrales que los aquejan no es de carácter religioso, sino étnico y cultural. En

¹ Piénsese en el caso de John Rawls y su tesis sobre la tolerancia —tal como la desarrolla en su libro *Political liberalism*—, la cual se encuentra vinculada a una concepción política de la justicia, fundada en lo que él denomina *overlapping consensus*.

ese sentido, es un conflicto literalmente “multicultural”. Cabe preguntarse: ¿acaso el multiculturalismo representa una amenaza para la integridad de esa nación? ¿Conducirá tarde o temprano a una “balcanización” de la sociedad? ¿Favorece la disolución de los vínculos que sostienen firme a la amalgama social, remplazándola por un conjunto de fragmentos que, juntos, constituyen un caleidoscopio prácticamente imposible de conceptualizar?

Aventurar una respuesta a estas preguntas resulta en extremo difícil, si se toma en cuenta lo siguiente: aun en sus peores excesos separatistas, el multiculturalismo estadounidense carece de un fundamento territorial. La cultura de la esclavitud, que se identificaba con un territorio determinado, fue aniquilada por la guerra civil. Sólo los mormones han logrado colonizar un espacio claramente delimitado, el estado de Utah. Sin embargo, su particularidad cultural y religiosa no amenaza de manera alguna la integridad de Estados Unidos, en la medida en que ese grupo acepta subordinarse a las reglas del federalismo.

Una cierta concepción del multiculturalismo parece compatible con el principio de tolerancia y su corolario político, el principio de igualdad. Digamos que esa vertiente bien podría llamarse “republicana”. Pero esa compatibilidad presupone la siguiente condición: que todo particularismo cultural o étnico no termine siendo oficial gracias a la intervención de los dirigentes ni de las instituciones del Estado federal.

Dentro de esta lógica, las políticas públicas, los fallos judiciales, las prácticas de reclutamiento en las empresas y los lineamientos pedagógicos de las escuelas públicas deben ser por fuerza *transculturales*. Cualquier intento de privilegiar a un grupo, a una etnia, a una religión, constituye un atentado contra el principio de tolerancia y el de igualdad.

La vertiente republicana del multiculturalismo fija necesariamente un límite a la tolerancia: prohíbe el otorgamiento de derechos espe-

ciales, el beneficio de gozar de una protección especial o la ventaja que ofrecen las relaciones con personas influyentes. En suma, rechaza los privilegios. En principio, el Estado debe dar la espalda a cualquier diferencia, debe ser *color-blind*; así lo proclaman una y otra vez los jueces de la Suprema Corte.

Sin embargo, esa neutralidad jamás excluye del todo ciertas medidas que tienden a compensar o corregir injusticias y desigualdades del pasado. Dicho de otra manera, la frontera entre el régimen de tolerancia y lo que no debe ser tolerado es, en muchos casos, negociable o modificable. La porosidad de dicha frontera dificulta el análisis del multiculturalismo y su práctica en Estados Unidos. No siempre es clara la línea que divide lo universal de lo particular, la esfera pública de la esfera privada.

Lo sabemos de sobra. Cuando una verdad particular invade el campo político para convertirse en una verdad impuesta, los vínculos sociales se debilitan.

II

Paradójicamente, la concepción republicana del multiculturalismo incluye la práctica de contabilizar razas y etnias. Este recurso, a diferencia del pasado, está desprovisto de connotaciones racistas. Tiene el propósito de borrar cualquier forma de discriminación o segregación racial.

Como bien se sabe, Estados Unidos está compuesto en la actualidad por cinco grupos diferentes: amerindios, blancos, afro-americanos, asiáticos e hispanicos. No es causal que en ese país las estadísticas oficiales, las encuestas, los análisis de conducta electoral estén siempre permeados por categorías relativas a raza, etnia y religión. Existe, por ende, una especie de hiper-etnización en los métodos estadounidenses de encuesta. Ello ha traído consigo un efecto indeseable: una avalancha de información poco confiable porque se basa

en categorías difusas, elaboradas en el transcurso del siglo XIX bajo el influjo del darwinismo social. Hoy día son contados los que creen en la división en “razas”, tal como fueron definidas antropológicamente. Sin embargo, muchos todavía se refieren a ellas. Esto ha provocado que confundamos a menudo categorías raciales con categorías culturales y lingüísticas.

Tomemos como ejemplo los cinco grupos identificados por la Oficina del Censo (U.S. Census Bureau): amerindios, asiáticos, negros, blancos e hispanicos. Las primeras cuatro categorías están identificadas, en el formulario del censo, como “razas”. La quinta, la de los hispanicos, se encuentra localizada en otra parte. Durante el censo, a las personas se les pide que elijan una de las cuatro razas a la que creen pertenecer. Si la clasificación no les complace, tienen la posibilidad de marcar la casilla “otra raza”. En dicho formulario no se prevé la mezcla de sangre, los *mixed-race Americans*. Al parecer, el gobierno es incapaz de pensar en las “razas híbridas”.

Los cinco grupos de pobladores así constituidos son una prueba fehaciente de la confusión reinante, en tanto que las “razas” en cuestión no son propiamente razas. “Llene el círculo que corresponda a la raza a las cual piensa usted que pertenece”, reza una de las consignas del censo. “Hispanico” no es en absoluto una raza, sino una noción transcultural debido a que “hispanicos” son las personas de cualquier raza que se reconocen como mexicanos, mexicano-americanos, cubanos, chicanos, portorriqueños, originarios de América Central o de Sudamérica, al igual que los que proclaman tener ancestros españoles.

De tal manera, las cinco categorías provienen explícitamente de las cinco razas identificadas durante el siglo XIX por los defensores del darwinismo social. No obstante, es preciso subrayar que las intenciones de los demógrafos y de los legisladores han cambiado. La contabilidad étnico-racial no cumple hoy, conviene subrayarlo, un cometi-

do racista. Su uso, digamos, está bien intencionado; representa el triunfo de la ideología antirracista.

Esa división étnico-racial, legitimada por la autoridad gubernamental, es en última instancia un artificio que permite afirmar la diversidad cultural de los Estados Unidos en la actualidad y justificar las demandas de compensación por la discriminación de antaño. El Estado debió reinventar la noción de “raza” para poder identificar con mayor acierto a las víctimas del racismo y poner en marcha, a partir de la década de 1980, las políticas de trato preferencial. La identificación racial no es, por consiguiente, una extravagancia antropológica inventada por los agentes del censo, sino el resultado de un proceso político deliberado.

Pero la actualización de la noción de “raza” como medida para favorecer a las víctimas de la discriminación no deja a todos satisfechos. Los más descontentos, los blancos y asiáticos de origen no-hispánico, consideran que son tratados como ciudadanos de segunda clase. Algunos beneficiarios de la política de cuotas preferenciales, clasificados oficialmente como no-blancos, aceptan con enorme disgusto la rigidez de la clasificación étnico-racial. Tal es el caso de los hispánicos y de todos aquellos *mixed-race Americans*, genuinos hijos del *melting-pot*.

Resulta sencillo infundir miedo a la mayoría de los anglos cuando se afirma, como lo hacen Peter Brimelow² o Samuel Huntington³, que la población blanca es una minoría ya en vías de extinción, sobrepasada de manera aplastante por los *afros*, los hispánicos y los asiáticos. El problema de ese tipo de análisis reside en que los hispánicos (se

²Véase su obra *Alien Nation. Common Sense about America's Immigration Disaster*, 1995.

³Principalmente en *Who are We: The Challenges to America's National Identity*, 2005.

calcula que representarán 21 por ciento de la población total en el año 2050) son contabilizados como no-blancos. Es frecuente el error, cometido por Brimelow, de confundir “raza” y “etnicidad”, lo que arroja como resultado que los hispánicos sean considerados *colored* para asimilarlos a los negros y a los asiáticos, como si los tres grupos formaran un bloque homogéneo.

Por otra parte, la población hispánica es la más reacia a aceptar las categorías étnico-raciales en las que se desea enmarcarlos. Un poco más de la mitad de los americanos de origen mexicano escogen la categoría “blanco”, mientras que el resto prefieren la indeterminación de la categoría “otra raza”. Es sintomático que los mexicano-americanos no se perciban como una minoría; su ambivalencia con respecto a la categorización racial es el claro signo de una población a la que poco o nada preocupa el asunto de la mezcla de razas.

En cuanto a los *mixed-race Americans*, su número cada vez más creciente plantea problemas irresolubles para el censo demográfico. La Oficina del Censo prohíbe que el encuestado elija más de una categoría racial. ¿Cómo definirse entonces cuando se tiene uno de los padres blanco y el otro negro, uno latino y uno asiático, uno mexicano-americano y uno afro-americano? Las categorías híbridas son ignoradas en Estados Unidos, donde aún se mantiene vigente la concepción arcaica del *one drop rule*: una sola gota de sangre negra, y el hijo que uno tiene es negro...

El hecho de conservar esa categorización rígida ha contribuido a “racializar” una sociedad que, con el tiempo, en términos sociológicos se ha vuelto más y más mestiza. El proceso del *melting-pot*, es decir, la asimilación entre grupos étnico-raciales mediante el matrimonio o la unión libre, es hoy una realidad viva e innegable en Estados Unidos, a menudo escamoteada por un discurso multicultural que se contenta con dar la espalda a variados fenómenos relacionados con el mestizaje.

III

El caso Bakke en 1978 fue la primera gran decisión judicial relativa a la política denominada *affirmative action*.⁴ En ella no se condenó el trato preferencial que pretendía compensar desigualdades pasadas. Buscó precisar su sentido y sus límites. La Suprema Corte declaró que una universidad tiene el derecho de elegir su estudiantado y de escoger los criterios étnicos, económicos o raciales para diversificar las promociones y, de esa manera, crear un medio más estimulante que fomente las condiciones de experimentación y creatividad entre los alumnos. Fijarse como meta esa diversidad forma parte de las libertades protegidas por la primera enmienda de la Constitución estadounidense. En consecuencia, la Escuela de Medicina de la Universidad de California (Davis) podía tomar en consideración la raza de un candidato a ingresar como un punto a su favor, con algunas limitantes. En primer término, que ése no fuera el único criterio empleado para elegirlo; en segundo, que no hubiera un número fijo de plazas reservadas de antemano para un grupo en particular. En ningún caso se trataba de privilegiar o favorecer a una raza por encima de otra al crear dos sistemas paralelos de admisión y justificando uno de ellos a partir de un principio ambiguo de justicia social apoyado en la existencia no demostrada de una discriminación vigente en el pasado. El único criterio válido para seleccionar a un estudiante perteneciente a un grupo étnico desfavorecido era la “diversidad” de la población estudiantil.

⁴ La *affirmative action* consiste en una política “temporal” y flexible, tal como la definen las cortes y las agencias gubernamentales, que promueve preferencias limitadas en favor de individuos con cierta calificación profesional con el propósito de remediar desigualdades originadas por el género o por la raza a la que se pertenece. Sin embargo, para no pocos políticos y líderes de opinión pública, ella significa algo más: un sistema de cuotas rígidas que incorpora los prejuicios que la sociedad debería esforzarse en erradicar.

La decisión tomada en el caso Bakke es importante para comprender la lógica del trato preferencial en Estados Unidos porque dicho caso sentó jurisprudencia. Aun hoy se le invoca a menudo para justificar el empleo explícito de referencias al grupo racial al que pertenece cada estudiante y para legitimar, en determinadas condiciones, la *affirmative action*.

La opinión de algunos jueces puso de relieve la complejidad que entraña la política de la *affirmative action* y la ambigüedad de una decisión que acabó por favorecer, aunque no lo confesara, la pertenencia a un grupo racial por encima del individuo, la igualdad de resultados por encima de la igualdad de oportunidades. Fue el caso del juez Harry Blackmun, quien dijo que esperaba que los programas de trato preferencial tolerados por la Suprema Corte pronto se volvieran obsoletos. Con ello daba a entender que era consciente de un dilema: para superar de una vez por todas el racismo, es necesario primero tener en cuenta la distinción de razas.⁵

En efecto, parece extraño que deba propiciarse un trato diferencial con el propósito de asegurar, a la larga, un trato igualitario. Esta ambigüedad constituye el meollo de la política antirracista estadounidense. Es el resultado de las políticas públicas que regulan todos los campos de la vida civil: la política de empleo en las empresas, de reclutamiento en las oficinas gubernamentales, de admisión en escuelas y universidades. Instituida como un remedio provisional contra la discriminación del pasado, la *affirmative action* se ha convertido en un medio para responder al mayor drama de la sociedad estadounidense, a saber: el fracaso en la integración de los negros en una sociedad que se proclama a sí misma democrática e igualitaria, y que no ha dejado de tratar a sus antiguos esclavos, al menos hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como miembros de una casta inferior.

⁵ La frase textual es: "In order to get beyond racism, we must first take account of race".

Todo parece indicar que la política de trato preferencial no constituye una panacea, simplemente porque genera más problemas de los que resuelve. Al menos así lo sugieren las incontables controversias que se han suscitado desde el caso Bakke.

Asimismo, llama la atención el hecho de que en Estados Unidos se haya resuelto contar lo que por definición escapa a la posibilidad de contabilizar: cuántas han sido las víctimas de la discriminación racial, cuáles las minorías que han sufrido injusticias, cuáles las que no las han padecido...

Aquellos que critican la *affirmative action* consideran que la preferencia a favor de las víctimas de la discriminación resulta tan injusta, tan contraria al principio liberal de la igualdad de oportunidades, que se trata en realidad de una discriminación al revés. Así, no es raro que un negro sea contratado de manera preferencial por el simple hecho de ser negro, rechazando a un blanco, aun cuando esté mejor calificado para el trabajo.

Por su parte, los defensores de esa política afirman que la legitimidad de la *affirmative action* reside en un principio de justicia distributiva. En su opinión, la igualdad exige medidas compensatorias destinadas a favorecer a grupos completos. En este sentido, la igualdad de oportunidades no basta para garantizar dicha justicia. Esta óptica ha sido adoptada por la U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), el organismo federal encargado de llevar a cabo los decretos de aplicación del título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (*Civil Rights Act*).

IV

El tema de la *affirmative action* entraña en realidad un debate sobre la naturaleza de la nación americana. Lo cierto es que un país multiétnico y multirracial, como lo es Estados Unidos, no puede pensarse a sí mismo como una república "única e indivisible". Un país como el

nuestro, cuyas raíces están hundidas en buena medida en la tradición jacobina, se define constitucionalmente como compuesto por todos los ciudadanos mexicanos sin distinción de origen, clase, raza o religión. Así, la entidad “pueblo” no es una categoría que acepte subdivisiones. De igual modo, excluye la existencia de diferentes pueblos.

Por el contrario, la concepción estadounidense es diametralmente distinta. Por ejemplo, para el juez Lewis Powell, quien dio a conocer el fallo en el caso Bakke, la nación americana no constituye un edificio monolítico. De hecho, es una federación de pueblos, una nación de muchos pueblos (*a nation of many peoples*), en teoría iguales entre sí, pero tratados de manera desigual por los poderes públicos hasta hace poco. Por consiguiente, el *sueño americano* que preconiza una igualdad de oportunidades para todos los individuos sin tomar en cuenta su raza o color, es más bien un ideal lejano, muy poco asequible para los negros y para las minorías que todavía son víctimas de prácticas discriminatorias por parte de sus conciudadanos.

No resulta descabellado, entonces, considerar a qué grupo étnico pertenecen los estudiantes menos privilegiados para darles “un empujón” —sigue razonando el juez Powell—. No obstante, consciente del peligro que habría si se procediera a legitimar ese tipo de categorizaciones deleznales, Powell propone que se adopte el compromiso de sólo tomar en cuenta la “raza” como elemento favorable para ser admitido en la universidad a condición de que se le considere uno de otros tantos elementos que deben ser ponderados. En cambio, recomienda prohibir toda clase de cuota fija, toda forma de categorización exclusiva y toda segmentación de los candidatos en grupos raciales. La selección de los aspirantes debe realizarse óptimamente comparando a los candidatos en términos individuales. Sólo así puede garantizarse una “auténtica diversidad” étnica, pero también cultural, geográfica y social.

Ya que la misión de la universidad es producir élites, concluye Powell, el futuro de la nación estará en manos de líderes que se hayan

educado en la diversidad de ideas que es también la diversidad de pueblos que forma la nación estadounidense. Gracias a la política de la *affirmative action*, la universidad producirá élites que serán la imagen de los numerosos pueblos de Estados Unidos.

A diferencia de una soberanía entendida como un bloque indivisible, según la tradición jacobina, en el caso de la nación estadounidense la soberanía está claramente dividida en segmentos étnicos.

Las numerosas celebraciones de la diversidad étnica que son organizadas cada año por las universidades en Estados Unidos no son una moda pasajera ni una consigna que provenga del partido gobernante en turno; son la fiesta cívica que tiene por objeto recordar y glorificar la legitimidad constitucional de la *affirmative action* decretada por los jueces de la Suprema Corte. El fallo Bakke, a pesar de su falta de unanimidad,⁶ fue innovador porque proporcionó una definición plural de la nación estadounidense.

No obstante, esa nueva definición no recibió ni ha recibido el apoyo unánime de las élites estadounidenses. La polémica no ha cesado el día de hoy. No sólo incluye el ámbito social, sino también a la Suprema Corte.

Algunos de los jueces defienden una concepción política de la nación fundada en el libre consentimiento de los ciudadanos iguales entre sí. Otros, situados en una postura radicalmente contraria, ponen de relieve en primer término el trato desigual a ciertas comunidades étnicas. Los primeros sólo conciben la legitimidad de los derechos individuales; los segundos están a favor de la existencia de derechos colectivos pertenecientes a los “pueblos” constitutivos de la nación.

En efecto, para los primeros, la nación estadounidense es una construcción política que se ha autodefinido opuesta a cualquier particularismo religioso, étnico y social. Se compone de individuos li-

⁶ En efecto, el fallo fue de 5 a favor y 4 en contra.

bres e iguales ante la ley, tal como lo precisa la 14^a enmienda desde 1868. De acuerdo con la Constitución, en el país no hay clase superior o dominante. Tampoco castas. Por eso la Constitución no tolera consideraciones acerca del color. En este sentido, la nación es una simple yuxtaposición de individuos, sin tomar en cuenta la etnia a la que ellos pertenecen. Y desde esa perspectiva, la *affirmative action* resulta inaceptable debido a que atenta contra el individualismo fundador de la nación. Se trata en realidad de una medida creadora de desigualdades, ya que divide a Estados Unidos en dos tipos de razas: las razas deudoras que no tienen derecho al trato preferencial y las razas acreedoras que sí tienen derecho al trato preferencial. Cabe subrayar, pues, que los que defienden esta postura conciben a la nación como una entidad exclusivamente cívica. La igualdad de oportunidades no es susceptible de negociación alguna. Establecer preferencias raciales resulta tan antidemocrático como otorgar títulos nobiliarios.

En cambio, para los defensores de la segunda postura que he delineado más arriba, la nación es sin duda una entidad cívica, pero también étnica, pues existe la urgencia moral de reparar injusticias de las que fueron víctimas ciertas minorías. Desde esta otra perspectiva la unidad de la nación democrática no descansa en el individuo, sino en la comunidad étnica. La igualdad es de hecho un asunto de herencia y de recursos disponibles. Las personas cuyos ancestros fueron esclavos no disponen siempre del capital social ni del capital económico necesarios para lograr su promoción. Por consiguiente, tienen el derecho de exigir ventajas.

A este debate sobre la definición y naturaleza de la nación estadounidense se encuentra vinculado por fuerza el debate sobre la significación política de la igualdad en un Estado de derecho. ¿Basta contentarse con un principio formal, el cual garantice a cada uno una igualdad de oportunidades, o bien conviene acelerar la marcha de la

historia y corregir los “entuerto” del pasado con el propósito de materializar una genuina igualdad?

Como lo he mencionado anteriormente, más allá de la disputa que mantienen ambas posturas, la *affirmative action* plantea una enorme dificultad: definir la naturaleza de dichas ventajas, establecer sin margen de error la lista de los grupos de víctimas, fijar los umbrales de intervención razonable. En otras palabras, parece casi imposible determinar con justicia y equidad cuál grupo tiene derecho a qué porcentaje de futuros matemáticos, biólogos, abogados o médicos. ¿Cómo no equivocarse al establecer la proporcionalidad que busca ser operativa a través del trato preferencial? ¿Con qué criterio establecer que ya existen en el país suficientes arquitectos asiáticos, médicos judíos, deportistas negros o abogados hispanos?

En consecuencia, la legitimidad o ilegitimidad de la *affirmative action* está muy lejos de quedar aclarada y ser aceptada unánimemente.

Bibliografía

Bergman, Barbara R., *In Defense of Affirmative Action*, Nueva York, New Republic Book/Basic Books, 1996.

Bolick, Clint, *The Affirmative Action Fraud*, Washington, D.C., Cato Institute, 1996.

Brimelow, Peter, *Alien Nation. Common Sense about America's Immigration Disaster*, Nueva York, Random House, 1995.

Civil Rights Act of 1964 (Title VII), en <http://www.eeoc.gov/policy/vii.html> [fecha de consulta: 10 de septiembre de 2007.]

Eastland, Terry, *Ending Affirmative Action. The Case of Colorblind Justice*, Nueva York, Basic Books, 1996.

Employment Law Information Network, en <http://www.elinfont.com/11246sum.php> [fecha de consulta: 11 de septiembre de 2007.]

Executive Order 11246, en http://en.wikisource.org/wiki/Executive_Order_11246?oldid=455911 [fecha de consulta: 10 de septiembre de 2007.]

Genter, Julie Anne, "The Philosophical Question of Race and its Import in the Affirmative Action Debate", en <http://www.stanford.edu/group/dualist/vol10/genter.html> [fecha de consulta: 14 de septiembre de 2007.]

Huntington Samuel, *Who are We: The Challenges to America's National Identity*, Nueva York, Simon & Schuster, 2005.

Rawls, John, *Political Liberalism*, 2ª ed., Nueva York, Columbia University Press, 2005.

Rosenfeld, Michel, *Affirmative Action and Justice. A Philosophical and Constitutional Inquiry*, New Haven, Yale University Press, 1991.

U.S. Census Bureau, en <http://www.census.gov> [fecha de consulta: 20 de septiembre de 2007.]

U.S. Equal Employment Opportunity Commission, en <http://www.eeoc.gov> [fecha de consulta: 20 de septiembre de 2007.]